



**Mónica Gordillo, Fernando Aiziczon,
Ana Elisa Arriaga y María José Franco (eds.)**

La reconfiguración del trabajo en democracia

Una mirada desde Córdoba al pasado reciente argentino

CAPÍTULO 9

El sindicalismo peronista de Córdoba ante el ascenso del menemismo

ERNESTO ROLAND

9.1 La dificultosa consolidación del menemismo y nuestra problemática de estudio

La asunción a la presidencia de la Nación de Carlos Saúl Menem –Partido Justicialista (PJ)– en julio de 1989, se produjo en el marco de una crisis sin precedentes signada por una feroz disputa entre las principales fracciones del capital –locales y externas– por la definición de la política económica (Basualdo 2010, págs. 281-285; Pucciarelli 2011, págs. 23-29). Ello generó fuertes cimbronazos en la demanda de dólares en el mercado cambiario, sucesivos estallidos hiperinflacionarios, insolvencia fiscal y financiera del Estado, parálisis en la gestión gubernamental y saqueos y protestas sociales y sindicales (Ferrari y Closa 2015).^[1] En el discurso de campaña de Menem hubo una dualidad en torno a promesas filiadas en la tradición peronista –como la concreción de un «pacto social» capaz de comprometer a todos los sectores de la producción detrás de un objetivo nacional común– y contenidos propios del discurso de

[1] La hiperinflación de 1989 batió el récord histórico: 4 923,6 %. En dicho año el producto bruto interno (PBI) cayó un 6.2 por ciento, aumentando considerablemente los niveles de desocupación, pobreza e indigencia. Algunas estimaciones indican que entre diciembre de 1988 y junio de 1989 el salario real se redujo entre un 48 % y un 57 % (Fair 2009, pág. 558).

reforma económica emergente en aquel entonces, conformando así una plataforma de gobierno de cierta ambigüedad (Canelo 2011).^[2]

En el período de ascenso del menemismo, los principales gobiernos del hemisferio occidental y la economía ortodoxa en auge coincidieron en que los costos de la seguridad social y de las políticas de bienestar eran demasiados altos y debían reducirse, para así posibilitar una recuperación del crecimiento económico (Hobsbawm 2015). Por ello, era necesario impulsar una serie de «reformas de mercado», que en América Latina fueron presentadas como la única solución a la crisis económica que atravesaba la región. De acuerdo con esta visión, patrocinada por los organismos multilaterales de crédito –el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)– las grandes potencias occidentales –especialmente los Estados Unidos– y los sectores empresariales más concentrados, los desequilibrios macroeconómicos de los países latinoamericanos eran tributarios de las limitaciones y disfuncionalidades del patrón de desarrollo orientado hacia el mercado interno promovido desde el Estado (Gerchunoff y Torre 1996). Para ello resultaba imprescindible reconfigurar y reducir del rol del Estado e impulsar una mayor integración de las economías nacionales al mercado mundial. Previo a la asunción de Menem, el discurso reformista contaba con una fuerte prédica a nivel local, presente en los principales medios de comunicación, diversos círculos intelectuales, *think tank* económicos, la tradicional derecha liberal y una parte importante de la dirigencia de los partidos políticos mayoritarios (Beltrán 2006).^[3] Sin embargo, la adopción del programa de refor-

[2] Mientras Menem prometió una «revolución productiva» y un «salariozo», la plataforma de gobierno del PJ propuso bajar la inflación a través de una reducción del déficit fiscal y reformar el Estado, con el objeto de desafectar al sector público de «actividades y funciones que no hacen a su accionar esencial», *La Voz del Interior* de Córdoba (en adelante LVI), 13/05/1989, pág. 7.

[3] El principal adversario de Menem en las elecciones nacionales de mayo de 1989, el gobernador de Córdoba Eduardo César Angeloz –Unión Cívica Radical (UCR)– fue mucho más enfático en su adhesión al programa de reformas, proponiendo impulsar un modelo económico «abierto y flexible» para acabar con una orientación económica de «más de cuarenta años», LVI, 18/03/1989, pág. 4; LVI, 11/04/1989, pág. 3. Para ello, prometió usar un «lápiz rojo» en su eventual administración, como metáfora de un fuerte ajuste fiscal y su entorno auguró una agresiva política de privatizaciones, una disminución de la presión fiscal y una reforma laboral que limite el derecho de huelga en los servicios públicos esenciales y modifique el régimen

mas fue sumamente dificultosa, sobre todo en el primer tramo de la presidencia de Menem. Allí, el nuevo gobierno justicialista tuvo que resolver una *doble brecha de credibilidad* (Canelo 2011).

Por un lado, intentó persuadir a los viejos adversarios antiperonistas ligados al mundo empresario sobre su voluntad y capacidad de implementar el programa de reformas y de estabilizar las principales variables macroeconómicas. Ello obedeció a la necesidad de lograr la aquiescencia de los principales agentes económicos, internos y externos, que disponían de un decisivo poder de veto sobre los mercados y la sustentabilidad del gobierno (Gerchunoff y Torre 1996).^[4] Pero este acercamiento a los tradicionales adversarios del peronismo, generó que el gobierno debiera lidiar con un segundo problema de credibilidad, clave en la cohesión de la coalición de apoyos políticos y sociales que llevaron a Menem a la presidencia. En efecto, el nuevo presidente debió persuadir a la estructura partidaria –en aquel entonces comandada a nivel nacional por Antonio Cafiero– y al sindicalismo peronista, de que las políticas adoptadas no solo eran convenientes e inevitables, sino que también *aggiornaban* las banderas tradicionales del justicialismo al nuevo escenario internacional (Canelo 2011).^[5]

legal de contrato de trabajo. A su vez, la plataforma de gobierno de la UCR propuso una modificación del régimen de sindicato único con personería gremial y de una única central sindical, para así lograr la «libertad y democratización de la actividad sindical», LVI, 13/05/1989, pág. 7; *Cuadernos Laborales de Córdoba*, (en adelante CL) n.º 4, octubre-noviembre de 1988, pág. 1. Esta temática suscitó cierta polémica en la campaña electoral, ya que Menem se expresó en defensa del régimen sindical vigente, en una actitud «corporativa» según Angeloz. LVI, 08/04/1989, pág. 5

[4] De allí las designaciones de Miguel Ángel Roig en el Ministerio de Economía –proveniente de Bunge y Born, uno de los principales grupos económicos del país tradicionalmente asociado al antiperonismo– del líder de la Unión de Centro Democrático (UCeDé) Álvaro Alsogaray como asesor presidencial en materia de deuda externa y de su hija, María Julia, como interventora de la empresa telefónica nacional ENTEL. En la misma sintonía se desarrolló la política exterior impulsada por el canciller Domingo Felipe Cavallo, basada en un alineamiento explícito con los Estados Unidos y un acercamiento al país que representaba la principal hipótesis de conflicto externo de la Argentina: Gran Bretaña (Miguez 2013).

[5] El Estado, que el gobierno nacional buscaba reconfigurar despojándolo de muchos de sus resortes de regulación de la esfera social y económica, fue históricamente el *locus* central del ideario peronista, imprescindible para afianzar la industrialización del país y garantizar una distribución equitativa de la riqueza a través de la gestación y regulación de acuerdos

Pero el vuelco hacia la política de reformas no solo contrastaba con los postulados tradicionales del peronismo y con ciertas expresiones públicas de la campaña electoral, sino que también incluía una eventual reforma laboral, poniendo así en tensión el patrón histórico de relación de los sindicatos frente al Estado y el conjunto de regulaciones e instituciones que dieron sustento al poder sindical desde mediados de los años cuarenta, con el surgimiento del peronismo (Murillo 2000).^[6] Sin embargo, en sus inicios, el menemismo priorizó la privatización de empresas públicas, particularmente las del sector transportes –aéreo y ferroviario– y el servicio de telefonía (Gordillo 2012b). Originariamente, el énfasis gubernamental en la política de privatizaciones obedeció a que estas fueron concebidas como un pilar de las reformas estructurales que alentaba la iniciativa privada en áreas hasta entonces reservadas al Estado, y, a la vez, representaban un instrumento de estabilización macroeconómica, al brindar una señal contundente a las fracciones dominantes del capital –local y externo– sobre el compromiso del gobierno en reducir el déficit fiscal. El carácter prioritario de las privatizaciones en la agenda gubernamental se vio reforzado con la implementación del Plan de Convertibilidad en abril de 1991, que instauró una paridad fija entre el peso y el dólar, ya que allí se tornó inflexible la necesidad de cerrar la brecha fiscal y sostener cierto nivel de reservas para garantizar el tipo de cambio. No obstante, la reforma laboral era clave para la consistencia macroeconómica de la política oficial, en tanto permitía modificar los precios relativos –reducir el «costo laboral» en el lenguaje de los empresarios– sin incurrir en una devaluación nominal del tipo de cambio, vedada por la vigencia de la convertibilidad (Etchemendy y Palermo 1998), y posibilitaba reasignar la fuerza de trabajo en un contexto de «reconversión productiva».^[7]

sectoriales entre sindicatos y empresarios (Sidicaro 2017). A su vez, históricamente el peronismo se consideró a sí mismo un movimiento ajeno a la tradición liberal tanto en materia económica como política, cuyos adversarios predilectos fueron la oligarquía terrateniente y el imperialismo (Pucciarelli 2011).

[6] Empresarios y sectores de opinión afines convirtieron el tema de la reforma laboral en una demanda desde el primer momento, como parte de una propuesta global de desregulación económica (Etchemendy y Palermo 1998, pág. 566).

[7] Desde mediados de los años cuarenta, el sindicalismo argentino se estructuró en base a una serie de pautas orientadas a una alta agregación de

La bibliografía especializada en el sindicalismo durante los años noventa señaló la existencia de diversas respuestas sindicales ante el programa de reformas (Murillo 1997). A su vez, se ha mostrado que una vertiente del sindicalismo filiada en el participacionismo sindical agrupado en «los 15» durante el mandato de Alfonsín, promovió las reformas con anterioridad a la asunción de Menem (Benez 2012), siendo su apoyo al candidato triunfante en las elecciones de 1989 el resultado de una apuesta estratégica por gravitar en la transformación del capitalismo argentino desde la representación sindical del ámbito laboral (Gómez 2009, pág. 17).^[8] Este panorama puede complementarse con una caracterización de los años noventa centrada en la pérdida de peso del sindicalismo en la sociedad, tanto desde el punto de vista de la construcción de subjetividades políticas como de la movilización social (Martuccelli y Svampa 1997); y el surgimiento de nuevas formas de organización de los sectores populares, ajenas a la matriz nacional-popular, como el movimiento de trabajadores desocupados emergente en la segunda mitad de los años noventa (Svampa y S. Pereyra 2003). Sin embargo, otras contribuciones, pusieron de relieve la oposición sindical a la política de reformas, mostrando que en los primeros años del menemismo se produjo una resistencia temprana de los gremios estatales y el predominio de acciones sindicales de protesta (Armellino 2015; Gómez 1997; Palomino 1995). A su vez, desde

intereses, basadas en el monopolio de la representación sectorial por parte de los sindicatos reconocidos por el Estado (Etchemendy y Palermo 1998). La estructura del sindicalismo tuvo una codificación legal, concentrada especialmente en la legislación sobre asociaciones profesionales, convenios colectivos de trabajo y de obras sociales (Murillo 1997), restauradas en las postrimerías del gobierno de Alfonsín. En líneas generales, la reforma laboral que estuvo en agenda durante el menemismo, persiguió flexibilizar la contratación de trabajadores, al incorporar formas de contratación a plazo, con menores contribuciones patronales e indemnizaciones por despidos y menores compensaciones por accidente de trabajo; reducir las erogaciones patronales a las obras sociales, desregulando el sector salud en base a un sistema de elección por parte del empleado del destino de su aporte; y establecer negociaciones colectivas descentralizadas, ya sea por distrito o por empresa. Los avances que el gobierno obtuvo en esta materia fueron parciales, se produjeron sobre todo en las dos primeras dimensiones y fueron posteriores al primer tramo del gobierno.

[8] En esa clave debe comprenderse la designación de Jorge Triaca –Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP)– como primer ministro de Trabajo del menemismo.

una mirada atenta a la especificidad del escenario provincial de Córdoba, se ha observado que la agenda de reformas se instaló tempranamente en dicha provincia, a partir de la ley de Reforma del Estado n.º 7.850, sancionada en octubre de 1989, pero su concreción fue dilatada durante los años noventa (Arriaga *et al.* 2012) y resistida por el movimiento obrero vinculado a las empresas estatales de servicios públicos (Arriaga 2021).^[9] También se ha mostrado que este primer intento de reforma provincial, de escasa concreción, contó con cierta oposición del movimiento obrero local, ligado a los diputados de extracción sindical del PJ (Roland *et al.* 2023).

Surge así un núcleo de interrogantes: ¿qué características adoptó la *brecha de credibilidad* de Menem en los peronistas de Córdoba, tanto del ámbito partidario como sindical? ¿Cómo procesó el sindicalismo peronista provincial este primer ciclo de reformas? ¿Cuáles fueron sus alineamientos y posicionamientos durante la emergencia del menemismo? ¿Qué debates atravesó el movimiento obrero cordobés en aquella coyuntura? ¿Cómo repercutió la dinámica político-partidaria en el campo sindical? Sostenemos que los sindicatos conservaron cierta relevancia social, en cuanto *estructuras movilizadoras* capaces de canalizar determinadas demandas y de plantear posicionamientos políticos, y ello se observa fundamentalmente en las organizaciones sindicales del ámbito estatal.^[10]

[9] Durante los años noventa, buena parte de la discusión sobre las reformas tomó una dimensión provincial, ceñida a las presiones del gobierno nacional para que las provincias reestructuren sus administraciones y privatizen sus empresas y bancos públicos. El punto de partida de este debate fueron las leyes de Emergencia Económica (n.º 23.695) y de Reforma del Estado (n.º 23.697), sancionadas entre agosto y septiembre de 1989 por el Congreso de la Nación, que colocaron al equilibrio fiscal como el principal objetivo de las políticas públicas y comenzaron a definir un principio de gobernabilidad del sistema democrático basado en la articulación del *tándem* reforma/estabilidad económica, que debía cubrir todas las esferas del Estado –Nación, provincia y municipios– (Gordillo 2013a, págs. 10-12).

[10] Empleamos el concepto de *estructura de movilización* en el sentido propuesto por los estudios de la acción colectiva (McAdam *et al.* 1999; Tarrow 1994). En esta perspectiva, una dimensión central para explicar los procesos de movilización social y expresión de demandas refiere a la disposición de estructuras organizativas. Estas pueden ser desde organizaciones institucionalizadas, hasta núcleos reducidos de personas estructurados como redes sociales. En nuestra indagación, observaremos que determinados sindicatos y agrupamientos intersindicales cumplieron un rol de este tipo en la Córdoba de los albores de la década del noventa.

No obstante, ello comenzó a mermar, al menos en lo que refiere al planteamiento de posicionamientos políticos, una vez consolidada la política económica del gobierno nacional y garantizada su competitividad electoral.^[11] En este proceso, las críticas de diversos sectores del peronismo de Córdoba hacia el gobierno nacional fueron neutralizadas por la estrategia adoptada por la conducción del PJ local. Para avanzar sobre nuestra problemática de estudio identificaremos a los principales nucleamientos sindicales peronistas y sus alineamientos políticos durante la emergencia del menemismo.^[12] Comenzaremos dando cuenta de las elecciones internas nacionales del PJ de junio de 1988 y su tramitación en Córdoba. Junto a ello, analizaremos el modo en el que los alineamientos políticos de los principales referentes sindicales repercutieron en la Regional Córdoba de la Confederación General del Trabajo (CGT) y sus recurrentes debates por su normalización.^[13]

- [11] La implementación de la ley de Convertibilidad en abril de 1991 redujo drásticamente la inflación y comenzó a atraer la inversión extranjera (Gordillo 2013a, págs. 10-11). En las elecciones legislativas de aquel año, a nivel nacional el PJ alcanzó el 40.22 % y obtuvo un triunfo contundente en la provincia de Buenos Aires. Allí se comenzaron a disipar las disidencias en el PJ, en una campaña donde los principales candidatos justicialistas defendieron los «logros económicos» del Plan de Convertibilidad y apelaron a la imagen positiva del nuevo ministro de Economía, el anteriormente canciller Cavallo. Existe cierto consenso en ubicar en el Plan de Convertibilidad y en las elecciones legislativas de medio término de 1991, el comienzo de la consolidación del menemismo (Bonnet 2008; Canelo 2011; Gordillo 2012b; Pucciarelli 2011).
- [12] Entendemos por *nucleamiento sindical* a aquellos espacios de coordinación intersindical de relativa estabilidad, conformados por sindicatos de primer y segundo grado, donde priman acuerdos de coyuntura o políticos (Natalucci y Morris 2016, pág. 37). Estos suelen ser fomentados por dirigentes sindicales que comparten una afinidad política e ideológica, que motiva coincidencias respecto de las estrategias de acción a desarrollar en determinado contexto.
- [13] Desde el punto de vista de la bibliografía especializada en el peronismo de Córdoba, la problemática planteada se encuentra vacante, ya que los trabajos disponibles se han focalizado en el período previo, signado por el ascenso de la corriente interna Renovación Peronista (RP) en la estructura partidaria (Closa 2016) y las modificaciones del vínculo entre el ala sindical y el ala política del peronismo durante los años ochenta (Closa 2005; Roland et al. 2023). Otros estudios se centraron en las transformaciones en la identidad política del peronismo provincial, priorizando la reconstrucción y análisis de las intervenciones discursivas de los principales portavoces del partido (Reynares 2012, 2017).

Una segunda dimensión de nuestro estudio abordará los principales posicionamientos sostenidos por el sindicalismo provincial ante la crisis hiperinflacionaria y el programa de reformas de Menem, considerando la agenda de privatizaciones y el debate por la reforma laboral. Junto a ello, se analizarán las distintas respuestas en dicha coyuntura, intentando dar cuenta de las transformaciones operadas en torno al dinamismo de determinados sectores y el estancamiento de otros.

9.2 El mapa político y sindical del peronismo de Córdoba ante el ascenso del menemismo

El 9 de julio de 1988 el PJ realizó elecciones internas nacionales para definir la fórmula presidencial para las elecciones del año siguiente. Las listas en pugna fueron las de Antonio Cafiero-José Manuel De la Sota y Carlos Saúl Menem-Eduardo Luis Duhalde. La compulsa fue un acontecimiento político de primer orden. El vencedor contaba con grandes chances de ganar la elección presidencial, dado el desgaste del gobierno nacional y la crisis socioeconómica en curso. Asimismo, fue la primera vez en la historia que el PJ definió su fórmula presidencial a través del voto directo de los afiliados, un mecanismo que los precandidatos de ambas listas habían reclamado desde su militancia en la RP, una corriente interna del justicialismo que desplazó de la conducción partidaria a los sectores tradicionales y ortodoxos (Ferrari y Closa, 2015). El hecho de que el precandidato a vicepresidente de la fórmula con mayores chances de triunfar fuera el presidente y principal referente del PJ de Córdoba, constituyó un elemento relevante para el escenario político provincial.^[14] El liderazgo de De la Sota en Córdoba se había consolidado poco tiempo antes, a partir de las elecciones internas del 29 de marzo de 1987 (Closa 2016; Roland *et al.* 2023). Allí, la lista 10 conducida por la RP –cuyo principal referente provincial era De la Sota– se impuso holgadamente a la lista 20 referenciada en César Albrisi.^[15] Si bien en las elecciones provinciales de septiembre de 1987 el peronismo volvió a ser derrotado por la UCR, resultando

[14] Al comienzo de la disputa interna, la mayor parte del arco político esperaba el triunfo de la fórmula Cafiero-De La Sota, al ser su titular el presidente del PJ a nivel nacional, gobernador del principal distrito electoral (la provincia de Buenos Aires) y contar con apoyos de relieve en la estructura partidaria.

[15] LVI, 3/4/1987, pág. 3; LVI, 31/3/1987, pág. 5.

reelecto Angeloz como gobernador, el PJ mejoró sustancialmente su *performance* respecto de elecciones pasadas, logró cohesión interna y posicionó un nuevo elenco dirigente que modificó las propuestas y el estilo del justicialismo provincial, tornándolo más afecto a captar las nuevas demandas de la sociedad –especialmente del electorado «independiente»– y distante de las apelaciones simbólicas tradicionales en el peronismo, sobre todo en las coyunturas electorales.^[16]

Desde la consolidación de su liderazgo provincial, De la Sota negoció con Cafiero su precandidatura a vicepresidente, desplazando al ex gobernador de Santa Fe José María Vernet, de fluidos vínculos con el sindicalismo. A su vez, Menem, quien se apartó de la RP con vistas a su carrera presidencial, desplegó una estrategia de búsqueda de apoyos focalizada en los adversarios de la corriente renovadora. De allí que, a nivel nacional, uno de los principales soportes de su precandidatura fuera el sindicalismo ortodoxo representado por Lorenzo Miguel –Unión Obrera Metalúrgica (UOM)– y el Grupo de los 15, agrupamiento de sindicatos con vastos recursos organizativos y poder de movilización, y un núcleo de sindicatos fuertemente activos liderados por Luis Barrionuevo –Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA)– que impulsó la Mesa Nacional Sindical Menem Presidente.^[17] A contrapelo, la fórmula renovadora tuvo el apoyo de la Mesa de Enlace Sindical que agrupó al sindicalismo renovador (o los 25), al ubaldinismo –el nucleamiento liderado por el secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini– y la Comisión Nacional de los 20.

Con el propósito de movilizar a los afiliados en su apoyo, ambas fórmulas desplegaron una intensa campaña proselitista criticando al gobierno nacional –en especial a su política económica– y presentándose como la mejor expresión de la tradición peronista, distribuyendo *incentivos colectivos* al interior del peronismo.^[18] En

[16] Dómina, Esteban, entrevista, 30/9/2021. Durante la recuperación democrática Dómina militó con De la Sota en la lista verde, opositora a la ortodoxia referenciada en Raúl Bercovich Rodríguez en las elecciones internas del PJ de julio de 1983, y luego en la RP. En las elecciones de septiembre de 1987 fue electo senador provincial por el departamento Capital.

[17] LVI, 01/06/1988, pág. 9 A; LVI, 16/06/1988, pág. 7.

[18] LVI, 07/06/1988, pág. 5; LVI, 08/06/1988, pág. 6. Hablamos de incentivos colectivos en el sentido propuesto por Panebianco (2009, págs. 39-43),

tal sentido, los portavoces de la lista renovadora recuperaron la tradicional apelación justicialista a la concertación entre el trabajo y el capital y una política de ingresos de signo redistributivo.^[19] Sin embargo, De la Sota en particular buscó distanciarse de sus adversarios y fustigó fuertemente al sector sindical que apoyó a Menem, tildándolo de «patota» o expresiones similares asociadas a una falta de adecuación a la vida política democrática.^[20] A la postre, dicho sector se reveló clave en el armado de Menem y tanto estas expresiones como cierta inclinación de Cafiero a dialogar con el gobierno nacional, fueron usufructuadas por Menem con constantes apelaciones al ideario movimientista del peronismo y el denuesto a la supuesta condición de «socialdemócratas» de sus oponentes.^[21] El resultado, sorprendente para muchos, fue un contundente triunfo de Menem, que se impuso en 20 de los 24 distritos electorales, entre ellos, la provincia de Buenos Aires.^[22]

En Córdoba la mayor parte de los sustentos territoriales del peronismo se volcaron hacia la fórmula Cafiero-De la Sota. Desde la lista 10 triunfante en los comicios primarios distritales de marzo de 1987, la RP había integrado a un conjunto amplio de agrupaciones y contaba con un armado territorial en todos los departamentos de la provincia.^[23] En aquel entonces, contaba con cierta base de apoyo sindical; a saber: la Mesa de Trabajo Gremial, referenciada en Manir Fatala –Asociación Gremial de Empleados de Comercio (AGEC)–

para destacar que la movilización de las bases de un partido político suele presentar un componente «desinteresado» o «no instrumental», asociado a la identidad política de sus adherentes. Ello no supone obviar otro tipo de motivaciones de la movilización partidaria, ligadas a una participación «interesada» en tanto búsqueda de beneficios particulares, pero aquí nos focalizamos en los incentivos colectivos ya que ellos revitalizaron a la tradición política peronista en el momento de gestación del menemismo.

[19] LVI, 08/06/1988, pág. 6.

[20] LVI, 12/06/1988, pág. 5; LVI, 29/06/1988, pág. 6.

[21] LVI, 03/06/1988, pág. 4; LVI, 06/06/1988, pág. 4; LVI, 11/06/1988, pág. 4.

[22] LVI, 10/07/1988, pág. 1; LVI, 13/07/1988, pág. 5; LVI, 16/07/1988, pág. 4. La lista Cafiero-De la Sota solo triunfó en Capital Federal, Formosa, Salta y Córdoba. En esta última provincia logró una ventaja relevante, a diferencia del resto del país, superando holgadamente a la fórmula menemista.

[23] Barrionuevo, Eduardo César, entrevista, 11/11/2021. Durante la recuperación democrática Barrionuevo militó en la lista verde liderada por De la Sota, siendo congresal provincial por dicho espacio, y ocupando el mismo cargo y miembro del Consejo Capital del partido, a partir de las primarias de marzo de 1987.

y Néstor Chavarría –Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)– el Bloque Peronista de los Gremios por la Unidad (GpU) –sector interno peronista de dicha agrupación– referenciado en Rubén Daniele –Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM)– José Campellone –Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA)– Luis Eduardo Pérez –Sindicato del Seguro (SSEG)– y Gustavo Núñez –Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ)– entre otros, y la Mesa Sindical Peronista Renovadora (MSPR), referenciada en Manuel Reyes –Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia (ASTF)– y Elio Lumelo, Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (SUTIAGA) (Roland *et al.* 2023).^[24] Asimismo, la RP también contaba con una alianza con la ortodoxia sindical de las 62 Organizaciones, liderada por Horacio Salusso (UOM) y Miguel de Benedetto –Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)–.^[25] Sin embargo, los apoyos sindicales de la RP se fueron debilitando una vez que la corriente ejerció la conducción del PJ, dado que muchos sindicalistas cuestionaron el estilo de liderazgo de De la Sota, sosteniendo que el partido había vuelto a recrear un manejo cupular, distante de la propuesta democratizadora y participativa esgrimida por la lista 10 en las primarias de marzo de 1987.^[26] Menem por su parte, contó con el apoyo a su

[24] LVI, 10/07/1988, pág. 1; LVI, 18/07/1988, pág. 5. El apoyo a la RP por parte de sectores sindicales no ortodoxos obedeció al hecho de que estos visualizaron en dicha corriente el instrumento para abrir el partido al debate interno y la participación militante y, en última instancia, para que el peronismo recupere su capacidad de convocatoria.

[25] LVI, 17/07/88, pág. 6. Como resultado de dichas alianzas, seis dirigentes sindicales resultaron electos diputados provinciales en las elecciones de septiembre 1987 por el Frente Justicialista Renovador (FREJURE) (Daniele, Pérez, Salusso, Fatala, Benedetto y Reyes) y muchos de ellos también ocuparon cargos partidarios.

[26] LVI, 03/11/1988, pág. 4; LVI, 04/11/1988, pág. 4; LVI, 16/11/1988, pág. 4; LVI, 19/11/1988, pág. 6; Reyes, Manuel, entrevista, 07/06/2021. El entrevistado comenzó su trayectoria en el sindicalismo durante la resistencia peronista, siendo elegido delegado del sindicato de empleados de farmacia en 1957 y participando de la normalización de la CGT-Regional Córdoba de ese año. Luego se integró a la corriente legalista referenciada en Atilio López –Unión Tranviaria Automotor (UTA)– y en 1972 accedió a la Secretaría General de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Con el retorno a la democracia fue electo concejal de la ciudad de Córdoba en 1983 y diputado provincial en 1987 por el PJ.

organización –Federalismo y Liberación (FyL), liderada por Leonor Alarcía– de sectores de la ortodoxia desplazados por la RP y del Frente Político Sindical, coalición interna del PJ que unió a la agrupación Unidad para la Victoria de Julio César Aráoz con un grupo de sindicatos «menemistas».^[27] Este congregó a las conducciones de cuatro sindicatos: los interventores de la UTA y los referentes locales de UTHGRA, del Sindicato de Conductores de Taxis (SCT) y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA).^[28] El apoyo brindado al menemismo por este espacio sindical se fundamentó en la apelación de Menem a los postulados tradicionales del peronismo, que reservaban un lugar central al sindicalismo en tanto «columna vertebral» del movimiento peronista.^[29]

En aquella coyuntura, el conjunto del movimiento obrero cordobés atravesaba un debate en torno a la normalización de la delegación regional de la CGT (Gordillo; Sangrilli *et al.* 2015). La CGT nacional había sido normalizada en noviembre de 1986, estimulando la normalización de las delegaciones regionales. Con anterioridad a las primarias nacionales del PJ, tres nucleamientos habían avanzado en un preacuerdo de unificación: la alianza entre la CGT Rodríguez Peña y la CGT Chacabuco, representada por Salusso y Hugo Boidi –Sindicato de Obreros de la Industria del Vidrio y Afines (SOIVA)– el ubaldinismo referenciado en Juan Carlos Rossi –Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA)– y la Mesa de Enlace, espacio de articulación entre la Mesa de Trabajo Gremial y GpU. Sin embargo, un sector interno del primero referenciado en el veterano dirigente Miguel Ángel Correa –Unión Obreros y Empleados de la Industria Maderera Argentina (UOEIMA)– y Eduardo Nieva –Asociación Libre de Empleados de Comercio y Telecomunicaciones (ALECYT)– comenzó a diferenciarse de sus emisarios.^[30] La discusión por el reparto de cargos –y, por ende, por la representatividad de cada uno– y por la aplicación de ciertas cláusulas del Reglamento para Delegaciones Regionales, derivó en un dilatado proceso de cuestionamientos e impugnaciones.

[27] LVI, 01/07/1988, pág. 9; J. C. Moreno, «La pregunta de los cónsules», LVI, 12/06/1988, pág. 11; LVI, 09/70/1984, pág. 4.

[28] LVI, 14/7/1988, pág. 4; LVI, 15/07/1988, pág. 3.

[29] LVI, 10/07/1988, pág. 4.

[30] LVI, 05/06/1988, pág. 8; LVI, 19/6/1988, pág. 6.

En ese marco intervino el resultado de las primarias nacionales del PJ que fortaleció al sindicalismo menemista de la provincia. Luego del triunfo interno de su fórmula, el espacio se amplió hasta cubrir a 20 sindicatos, incorporando al ubaldinismo de Córdoba.^[31] Con ello, el espacio sindical menemista se dotó de una enérgica estrategia para disputar la normalización de las 62 Organizaciones-Regional Córdoba y de la CGT-Regional Córdoba.^[32] A nivel nacional, el resultado de la primaria revitalizó fuertemente al sindicalismo ortodoxo, que aprovechó la oportunidad para relanzar las 62 Organizaciones como «único brazo político del sindicalismo peronista» y rediscutir el esquema de poder interno de la CGT, lo que derivó en un cuestionamiento a la figura de Ubaldini por parte de los 15.^[33] En Córdoba, el sindicalismo menemista replicó dicha estrategia y bregó por una normalización de la delegación provincial de las 62 con la anuencia de Lorenzo Miguel, para desde allí encarar la normalización de la CGT-Regional Córdoba, buscando que la regional adoptara una conducción mayoritariamente peronista y posicionamientos políticos alineados con el candidato a presidente del PJ, lo que generó discrepancias con los sectores independientes de la Mesa de Enlace y de los GpU.^[34] Luego de dilatadas negociaciones, en los plenarios de agosto de 1988 se concretó la normalización, resultando electo Salusso (UOM) como secretario general, Elio Murúa (ASTF) como adjunto y Boidi (SOIVA) como secretario gremial; entre otras autoridades (Gordillo; Sangrilli *et al.* 2015, pág. 118). Sin embargo, un sector de gremios dio continuidad a la alianza CGT Rodríguez Peña-CGT Chacabuco, desconociendo la gestión normalizadora liderada por Salusso. Estos constituyeron un Secretariado Provisorio, presidido por Correa y conformado por Adolfo Cortez (adjunto), Eduardo Nieva (gremial), Antonio Alomar (organización) y Oscar Fernández (prensa).^[35] En este marco, con una normalización de la CGT que se reveló incapaz de aglutinar a todo el espectro sindical provincial, «unificarlo» en el vocabulario

[31] LVI, 25/07/1988, pág. 4; LVI, 28/07/1988, pág. 6.

[32] LVI, 20/07/1988, pág. 4.

[33] LVI, 14/07/1988, pág. 3.

[34] LVI, 30/07/1988, pág. 7.

[35] CL, n.º 4, pág. 5. De este modo, se perfilaron dos CGT, la liderada por Salusso, denominada CGT Lima, y la referenciada en Correa, llamada CGT Chacabuco.

sindical, se produjo el triunfo de Carlos Menem en las elecciones nacionales del 14 de mayo de 1989.^[36]

A nivel nacional, la política de reformas de Menem vino acompañada de una ofensiva para desplazar a Ubaldini y reorganizar la CGT con un predominio del sector de los 15, que controlaban el ministerio de Trabajo con Triaca.^[37] Por las resistencias del secretario general de la CGT y de sus aliados, la entidad se fracturó en el Congreso del teatro San Martín, realizado el 11 de octubre de 1989, formándose así dos centrales sindicales. Por un lado, la CGT San Martín, abiertamente oficialista, conducida por Guerino Andreoni (AGEC), quien defendió la política oficial como «la única posible» y rechazó categóricamente la posibilidad de realizar un paro general, dado el deterioro de los principales indicadores económicos y sociales.^[38] Por el otro, la CGT-Azopardo, liderada por Ubaldini, con el apoyo de ubaldinistas y renovadores que no se acoplaron al proyecto político de Menem, como Víctor De Genaro –Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)– y María Sánchez –Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA)– y ortodoxos que no aceptaron (al menos originariamente) una subordinación al gobierno, acaudillados por Lorenzo Miguel y Diego Ibáñez, Sindicato Unidos Petroleros del Estado (SUPE). Producto de dicha división, una parte importante del sindicalismo se ubicó en la CGT San Martín y los sindicatos pequeños y medianos, la mayoría de las regionales del interior, algunos sindicatos grandes y cierta izquierda sindical se agruparon en la CGT Azopardo.^[39]

[36] LVI, 20/11/1988, pág. 7.

[37] CL n.º 6, septiembre de 1989, págs. 3-5; CL n.º 7, diciembre de 1989, págs. 3-5.

[38] LVI, 16/03/1990, pág. 4; CL n.º 8/9, septiembre de 1990, págs. 14-15. El primer tramo de la gestión de Menem se caracterizó por una continuidad en la suba de precios –1990 también fue un año hiperinflacionario, arrojando este indicador un 1343%– en la recesión y en la pérdida del salario real. La respuesta invariante del gobierno ante las diversas manifestaciones de la crisis, consistió en ratificar el rumbo elegido y acrecentar la celeridad de las reformas.

[39] LVI, 14/08/1989, pág. 4; CL n.º 12, mayo de 1991, págs. 17-20. Poco tiempo antes del traspaso del poder, Ubaldini no descartó la posibilidad de que la CGT realice un paro general al gobierno de Menem si las condiciones lo ameritaban. LVI, 21/05/1989, pág. 11. La medida no se concretó y fue resistida no solo por la CGT San Martín, sino también por los aliados ortodoxos de Ubaldini, especialmente Miguel e Ibáñez, que en todo momento procuraron restablecer su vínculo con el gobierno nacional. Desde

La fractura nacional de la CGT repercutió en Córdoba. La CGT Chacabuco se pronunció con una carta abierta de Correa, de respaldo a Ubaldini, cuestionó la política económica y rechazó una eventual reforma laboral ideada por Triaca.^[40] Salusso de la CGT Lima también se pronunció en respaldo a Ubaldini, posiblemente por el alineamiento nacional de su gremio, pero calificó a Triaca como «uno de los hombres más inteligentes del movimiento obrero». Si bien el inicio de la CGT Lima fue promisorio, en tanto contó con el respaldo del PJ hegemonizado por la RP y logró reunir a la casi totalidad de los sindicatos estatales y sindicatos industriales claves como la UOM y el SMATA, su dinámica interna fue generando múltiples rupturas y alejamientos.^[41] A su vez, el mismo Salusso se vio compelido a renunciar a su cargo de secretario general, para así asumir una banca de diputado nacional, en reemplazo de De La Sota, quien fue designado embajador en Brasil en abril de 1990.^[42] Sin un liderazgo definido, con escasos apoyos, y, como veremos, con posiciones políticas ambiguas e indeterminadas, la CGT Lima entró en franco declive. En este marco, las expresiones de disconformidad del movimiento obrero provincial tendieron a concentrarse en la CGT Chacabuco. Si bien esta se alineó orgánicamente con la CGT Azopardo, Correa instó «cariñosamente» a Ubaldini a adoptar medidas de fuerza en oposición a la política socioeconómica; en caso contrario, Córdoba iba a «retomar su rol histórico».^[43] Ello se explica, en buena medida, porque la CGT Chacabuco contó con la participación de regionales combativas del interior provincial como las de Río Cuarto, Río Tercero y Villa María y, especialmente, de la Coordinadora de Gremios Estatales (CGE), que tenía mayor capacidad de movilización en esta coyun-

el punto de vista del gobierno, los posicionamientos de Ubaldini eran especialmente molestos, en tanto esperaba que los sindicatos fueran un «colchón de contención» del malestar social, no un actor con potestad de discutir la política oficial. LVI, 04/02/1990, pág. 4.

[40] CL n.º 6, septiembre de 1989, pág. 7.

[41] LVI, 27/03/1990, pág. 4.

[42] LVI, 22/03/1990, pág. 5.

[43] LVI, 07/03/1990, pág. 1. Luego Correa se integró al Consejo Directivo de la CGT Azopardo. LVI, 27/03/1990, pág. 4.

tura y de donde surgieron las principales voces de disconformidad con el gobierno nacional.^[44]

Desde una tesitura contraria, el sindicalismo menemista de Córdoba redobló su apuesta por ganar posiciones en el campo sindical provincial. Si bien con el correr de 1990 perdió buena parte de los aliados que obtuvo tras el triunfo en las elecciones nacionales del PJ de 1988, el nucleamiento menemista de Córdoba impulsó una regional provincial de la CGT San Martín, bautizada como «CGT Santiago del Estero».^[45] Fue integrada por sindicatos pequeños, de escasa capacidad de convocatoria y movilización. Su estrategia tuvo dos ejes. Por un lado, presionar a las seccionales locales sindicales para que se alineen con los posicionamientos de sus conducciones nacionales, si estaban enroladas en la CGT San Martín. Por otro, apostar a un diálogo político privilegiado con el gobierno nacional, a través de Luis Barrionuevo, interventor del Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS).

A nivel nacional, en el primer tramo de su gobierno Menem tuvo que lidiar con múltiples voces de cuestionamiento al interior del peronismo, en un escenario donde, según las encuestas de opinión la consideración pública del presidente se deterioraba mientras crecía el rechazo de la población hacia la política.^[46] Las más resonantes fueron aquellas que tuvieron lugar en la conducción nacional del PJ –Consejo Nacional Justicialista (CNJ) presidido por Cafiero– y en el denominado Grupo de los Ocho, una disidencia de extracción renovadora en la Cámara de Diputados de la Nación, conformada por ocho diputados referenciados en Carlos «Chacho» Álvarez y Germán Abdala. En el caso de Cafiero y su sector de la RP, sus pronunciamientos oscilaron entre un acompañamiento de la gestión gubernamental y un reclamo por «volver a las fuentes» del justicialismo.^[47] El Grupo de los Ocho, en cambio, fue más

[44] LVI, 28/03/1990, pág. 5. A su vez, sumó sindicatos del ubaldinismo cordobés, como AOITA, que se habían acercado al menemismo luego de las primarias nacionales del PJ. LVI, 18/03/1990, pág. 6.

[45] LVI, 02/04/1990, pág. 5; CL n.º 8-9, septiembre de 1990, pág. 38.

[46] Moreno, J. C. «Algo se ha puesto en movimiento», LVI, 18/02/1990, pág. 8; CL n.º 10-11, pág. 11. En este escenario, la mayor parte de la dirigencia peronista vio con expectativas negativas los escenarios electorales venideros.

[47] LVI, 19/02/1990, pág. 5; LVI, 14/03/1990, pág. 4; LVI, 17/03/1990, pág. 4. La posición de Cafiero ante el gobierno nacional se encontraba tensionada por su interés para reformar la constitución provincial de Buenos Aires para habilitar su la reelección como gobernador, para lo cual necesitaba el

enfático en su cuestionamiento al programa económico, efectuando propuestas alternativas en sintonía con la CGT Azopardo.^[48]

En Córdoba, las voces disidentes en la esfera partidaria fueron mucho más reducidas y ello obedeció, en buena medida, a la estrategia adoptada por De la Sota. A comienzos de 1990, los principales portavoces del PJ en el parlamento provincial, expresaron su apoyo al «derecho de disentir» del Grupo de los Ocho. En tal sentido, Juan Carlos Maqueda, vicepresidente segundo de la cámara baja, Mario Blanco, titular alterno del bloque del PJ y Esteban Dómina, senador por la capital, emitieron un documento que denunció una «crisis de identidad» en el peronismo producto del diagnóstico sostenido por el gobierno ante la crisis de «neto corte monetarista y liberal», la alianza con la UCeDé y la «obsecuencia» de los sectores menemistas.^[49] En este marco, la RP de Córdoba atravesó un debate interno en el cual se evaluó distanciarse de Menem o pactar una especie de «tregua política» hasta que la crisis amaine, expresando públicamente el apoyo al gobierno nacional.^[50] Primó la segunda alternativa, en estrecha relación con la estrategia personal de De La Sota.^[51] Así, durante 1990 el PJ de Córdoba adoptó un perfil político reservado, volcando su militancia hacia políticas asistenciales, y De la Sota aprovechó su cargo diplomático para fortalecer su vínculo con los sectores empresarios.^[52] El partido, a cargo de su titular alterno Julio Tejeda, fue cuestionado por diversos sectores internos por entrar en un lapso de «inmovilidad».^[53] La brecha para disputar la credibilidad del nuevo gobierno nacional justicialista comenzó a cerrarse en el PJ de Córdoba y ello terminará de consumarse en las elecciones de 1991.

apoyo del gobierno nacional (Pucciarelli 2011, págs. 49-56). Dicha apuesta finalmente fracasó en el plebiscito provincial del 5 de agosto de 1990, y derivó en la renuncia de Cafiero a la presidencia del partido. Con ello, Menem tomó el control de la estructura partidaria, logrando que su hermano, Eduardo, se hiciera de su titularidad.

[48] LVI, 01/02/1990, pág. 5; LVI, 22/03/1990, pág. 4.

[49] LVI, 07/02/1990, pág. 5.

[50] LVI, 11/2/1990, pág. 5; LVI, 07/03/1990, pág. 4.

[51] LVI, 25/02/1990, pág. 4; LVI, 26/02/1990, pág. 4; LVI, 27/02/1990, pág. 5; LVI, 21/03/1990, pág. 9.

[52] LVI, 22/03/1990, pág. 5; LVI, 26/03/1990, pág. 5.

[53] LVI, 18/03/1990, pág. 5.

9.3 Las respuestas del sindicalismo ante la crisis hiperinflacionaria y el programa de reformas de Menem

Con anterioridad al plan de reformas, diversos sectores del sindicalismo cordobés se habían pronunciado contra las privatizaciones de las empresas del Estado, entre ellos la Mesa de Enlace y el ubaldinismo.^[54] Sin embargo, el peso político del sindicalismo peronista se encontraba fuertemente debilitado, producto de la preeminencia que la dirigencia de la rama política del peronismo había conquistado en el PJ, asociada al ascenso de la RP, y de la fragmentación del campo sindical.^[55] Ello explica que el sindicalismo haya sido un actor secundario en la campaña electoral nacional de mayo.^[56] Pese a las expresiones de deseo vertidas tras el triunfo de Menem sobre una revitalización de una «rama sindical», las diversas expresiones sindicales peronistas tendieron a negociar su papel en la estructura partidaria de manera errática y aislada.^[57]

No obstante, una de las principales oposiciones al programa de reformas del gobierno de Menem vino del ámbito sindical, específicamente de los sindicatos de la órbita estatal (*Armellino 2015; Gómez 1997; Palomino 1995*), muchos de ellos de filiación peronista. No casualmente fue en dicho ámbito donde se registró la mayor cantidad de conflictos en 1989.^[58] A nivel nacional, este proceso puede observarse con claridad en torno a los alineamientos que se produjeron al interior de la CGT. Una vez producida la fractura de la CGT en octubre de 1989, el sector más férreamente opositor a la política menemista fue la Comisión Nacional de Gremios Estatales de la CGT Azopardo, que agrupó a gremios de la administración

[54] LVI, 24/07/1988, pág. 7; CL n.º 4, octubre-noviembre de 1988, pág. 7.

[55] Existe una amplia bibliografía sobre el declive del peso relativo del sindicalismo al interior del PJ. A nivel nacional, pueden consultarse los aportes de *Gutiérrez (1998)*, *Levitsky (2005)* y *Mc Guire (1997)*. En clave subnacional los trabajos de *Closa (2005)* y *Lacher (2016)*, entre otros. Para una mirada focalizada en el peronismo de Córdoba que problematiza la conceptualización de dicho proceso en términos de «desindicalización», véase *Roland et al. (2023)*.

[56] LVI, 08/05/1989, pág. 5.

[57] Barrionuevo, Eduardo César, entrevista, 11/11/2021. Sin embargo, el sindicalismo conservó una cuota de poder dentro del PJ de Córdoba, observable en las candidaturas en las elecciones de 1989, en puestos expectables, de Salusso a diputado nacional y de Campellone a senador provincial por el departamento Capital.

[58] LVI, 06/08/1989, pág. 5 A; CL n.º 3, abril-mayo de 1988, pág. 14.

pública y de las empresas del Estado; directamente afectados por la reforma estatal, las privatizaciones y la reducción y reubicación del personal de la administración pública.^[59] Si bien no representaron a la totalidad del espectro laboral del ámbito estatal, contaron con una importante cantidad de afiliados en todo el país y representatividad en áreas claves del Estado.^[60] Sus principales referentes fueron Víctor De Genaro (ATE) y María Sánchez (CTERA), quienes cuestionaron la reforma del Estado y la política de privatizaciones y propusieron una reestructuración de las empresas del Estado con participación directa de los trabajadores en sus órganos de dirección y control.^[61] La Comisión Nacional de Gremios Estatales realizó la primera manifestación sindical opositora de relieve y alcance nacional: el paro nacional de 24 horas del 21 de marzo de 1990 con movilización al Congreso.^[62]

En Córdoba, como señalamos, se conformó una CGE, que articuló su accionar con la Comisión Nacional de Gremios Estatales de la CGT Azopardo.^[63] Fue integrada por diecisiete sindicatos de la órbita estatal y sus principales portavoces fueron Sixto Ceballos –Luz y Fuerza (LyF)– Luis Bazán (Obras Sanitarias), Manuel Chara –Sindicato de Empleados Públicos (SEP)– Néstor Harrington (AGEPJ) y Walter Grahovac, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).^[64] Si bien el agrupamiento era plural en materia político-partidaria, fueron mayoritarios los sindicatos que habían formado parte del Bloque Peronista de los GpU aliado a la RP. La CGE propuso, infructuosamente, realizar un paro provincial en un plenario de regionales de la CGT de Córdoba, en Río Tercero, con motivo de la «crisis laboral» que atravesaba la provincia, y sostuvo que la CGT Azopardo debía impulsar una medida similar en el orden nacional.^[65] En ese marco, el nucleamiento se sumó a la convocatoria del paro de la Comisión Nacional de Gremios

[59] LVI, 06/03/1990, pág. 5; LVI, 09/03/1990, pág. 1.

[60] LVI, 15/03/1990, pág. 5.

[61] LVI, 01/03/1990, pág. 5.

[62] LVI, 16/03/1990, pág. 4; LVI, 18/03/1990, pág. 6; LVI, 21/03/1990, pág. 1; CL n.º 8-9, septiembre de 1990, págs. 33-34.

[63] LVI, 09/03/1990, pág. 5; LVI, 17/03/1990, pág. 4.

[64] Formaron parte de dicho nucleamiento LyF, AGEPJ, UEPC, Obras Sanitarias, SEP, SUOEM, docentes universitarios, vialidad nacional y provincial, personal civil de las fuerzas armadas, telefónicos y la Intersindical Ferroviaria, entre otros. LVI, 18/03/1990, pág. 6.

[65] LVI, 17/03/1990, pág. 4; LVI, 18/03/1990, pág. 6.

Estatales del 21 de marzo de 1990, organizando una movilización a la ex plaza Vélez Sarsfield, donde los dirigentes sindicales exigieron un cambio drástico del programa económico en el sentido reclamado por la CGT Azopardo y la suspensión de las privatizaciones, cuestionando la alianza de Menem con el liberalismo.^[66] Pese a que el acatamiento del paro y la movilización no fue del todo exitoso, la jornada de protesta reflejó que una parte relevante del sindicalismo provincial peronista no acataba la política nacional y contaba con cierta capacidad de movilización.^[67]

La organización del paro estatal nacional en Córdoba expresó, en cierto modo, la situación en la que se encontraban inmersos los gremios convocantes. Estas organizaciones ya venían dinamizando un ciclo de protesta que comenzó a tomar cuerpo a partir de la sanción de la ley de Reforma Administrativa del Estado Provincial en octubre de 1989, que habilitó al Poder Ejecutivo a privatizar parcialmente algunas dependencias estatales, descentralizar y reestructurar la administración pública y desregular las condiciones laborales de los agentes del Estado (Sapp 2023).^[68] A su vez, la normativa permitía reducir la planta de empleados públicos a partir de un régimen de retiros voluntarios y limitar las contrataciones o designaciones de personal (Arriaga *et al.* 2012). Tanto la ley sancionada como los posicionamientos del gobernador Angeloz en torno a la crisis, instalaron en el debate político la posibilidad de privatizar las principales empresas del Estado provincial: el Banco de la Provincia de Córdoba, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y la Empresa Provincial de Obras Sanitarias (EPOS) (Closa 2008). Resultó particularmente significativa para el sindicalismo, la intención del gobierno de recuperar la autoridad para fijar políticas salariales a través de la ley de Reforma Administrativa, eliminando cálculos de actualización salarial referenciados en cargos o categorías ajenas al ámbito provincial. Estos aspectos de la ley despertaron la oposición de los sindicatos estatales, quienes

[66] LVI, 20/03/1990, pág. 6.

[67] LVI, 25/03/1990, pág. 1. El paro no logró paralizar la mayoría de las dependencias estatales y la convocatoria a la movilización no fue masiva. LVI, 22/03/1990, págs. 1 y 5.

[68] La normativa fue presentada como una adecuación provincial a la ley de Reforma del Estado sancionada por el gobierno nacional, cuyos principales objetivos fueron la reducción del déficit fiscal y la reestructuración, descentralización y privatización de las empresas estatales nacionales.

articularon acciones de protesta con los diputados de extracción sindical del PJ (Roland *et al.* 2023).^[69] En este debate buena parte del sindicalismo provincial peronista difirió respecto del gobierno nacional, que bregó para que Córdoba y el resto de las provincias adoptaran leyes similares, en consonancia con las sancionadas a nivel nacional. Sin embargo, la ley de reforma administrativa fue aprobada con el acompañamiento de la mayor parte de la bancada justicialista, con la introducción de algunas modificaciones en el proyecto original. Ante ello, buena parte de los sindicatos provinciales rechazaron la ley, liderados por los gremios del sector público (Closa 2009). Ello dio lugar a diferentes modalidades de protesta: concentraciones en las inmediaciones de la Legislatura provincial con acciones contenciosas que derivaron en enfrentamientos con la policía, movilizaciones por las calles de la ciudad, asambleas en los lugares de trabajo, interrupción de servicios esenciales, paros parciales por turno, ocupaciones de lugares de trabajo, entre otras. Simultáneamente se produjeron recurrentes conflictos sectoriales protagonizados por diversos sindicatos del ámbito público (fundamentalmente LyF, SEP, SUOEM, UEPC, Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS), AGEPJ y Sanidad) y las autoridades gubernamentales locales, con varias medidas de fuerza y movilizaciones.^[70] Las demandas tendieron a centrarse en la cuestión salarial, producto de la constante desvalorización del salario generada por la hiperinflación, y en la oposición a los anuncios de recortes y reformas por parte del gobierno provincial. En buena medida, la capacidad de protesta de estos sindicatos obedeció al hecho de que sus bases de representación contaban con la estabilidad laboral propia del ámbito público, a diferencia de los sindicatos del sector privado, ya que ello brindó mayor margen de acción a sus representantes sindicales y permitió que sus organizaciones operen como estructuras movilizadoras.^[71]

[69] CL n.º 7, diciembre de 1989, págs. 1-5.

[70] LVI, 21/03/1989, pág. 3; LVI, 21/05/1989, pág. 4; LVI, 22/05/1989, pág. 3; LVI, 02/08/1989, pág. 1; LVI, 03/08/1989, pág. 5; J. C. Moreno, «La CGT ¿en la calle o en la Casa Rosada?», LVI, 10/08/1989, pág. 11; LVI, 08/09/1989, pág. 5; LVI, 01/04/1991, pág. 3; LVI, 25/04/1991, pág. 4.

[71] Daniele, Rubén, entrevista, 27/11/2021. Daniele inició su militancia en el SUOEM en el último tramo de la dictadura, formó parte del Bloque Peronista de los GpU, y fue electo diputado provincial por el PJ, en las elecciones provinciales de septiembre de 1987.

En el ámbito privado, la recesión económica que signó el comienzo del menemismo derivó en que los despidos y las suspensiones del personal fueran recurrentes. Ello fue notable en el momento de transición del mandato presidencial en las industrias mecánicas, textil, calzado, de medicamentos, construcción y metalúrgica, entre otras, y se mantuvo durante el primer tramo del gobierno de Menem.^[72] En este contexto, los principales sindicatos industriales priorizaron el sostenimiento de los puestos de trabajo por encima de las reivindicaciones salariales, proponiendo la creación de mesas tripartitas entre el gobierno provincial –representado por el Ministerio Provincial de Trabajo– las cámaras patronales y los representantes sindicales.^[73] Ello puede advertirse en diversos conflictos suscitados a raíz de despidos y suspensiones en la industria metalúrgica, automotriz, de calzado, la construcción, entre otros. En muchas oportunidades los empresarios argumentaron no poder sostener el personal dada la desarticulación de la cadena de proveedores de materias primas e insumos y/o la falta de demanda en el mercado interno.^[74] Ante ello, los dirigentes sindicales elaboraron diversas propuestas para el sostenimiento de los planes de negocios de las empresas, a efectos de sostener la actividad de los establecimientos fabriles.^[75]

Quizás quien mejor haya expresado el rol adoptado por los principales sindicatos industriales en el contexto de la crisis hiperinflacionaria, fue el secretario general del SMATA, José Campellone, quien tempranamente advirtió:

[72] LVI, 22/05/1989, pág. 4. Algunas estimaciones indicaron que las ventas de comercio minorista de marzo de 1990 fueron de entre un 40 % y un 80 % menores que las de marzo de 1989, medidas en volumen de productos. LVI, 01/04/1990, pág. 2.

[73] Durante la primera gestión de Angeloz, el gobierno de Córdoba dotó al Estado provincial de una estructura institucional propia para regular las relaciones laborales, finalmente concretada en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba (G. Gerbaldo 2022).

[74] Esta justificación fue esgrimida tanto por pequeños y medianos industriales, como por las empresas que controlaban los principales establecimientos de la provincia, como Sevel y Renault, en la industria automotriz, y Arcor, en la alimenticia. LVI, 21/05/1989, pág. 4; LVI, 22/05/1989, pág. 4.

[75] Por ejemplo, en febrero de 1990, el secretario general de la UOM-Córdoba, Jorge Almada, le propuso a la automotriz Sevel ampliar los contratos con pequeñas y medianas empresas autopartistas, para proteger sus puestos laborales, buscando el respaldo del Ministerio de Trabajo de la provincia. LVI, 22/03/1990, pág. 5.

«Estamos inmersos en una crisis muy grave y profunda, en la que la tendencia de nuestra conducción fue la de priorizar por sobre todas las cosas la defensa de la fuente de trabajo y, paralelamente, dentro de las posibilidades de la industria automotriz en el país, mejorar nuestros salarios. En el caso puntual del automóvil, sabemos que los clientes no compran vehículos cuando una fábrica está en un conflicto muy serio».^[76]

Resulta particularmente significativo el caso de la UOM, el principal sindicato industrial de la provincia en número de afiliados y tradicionalmente el de mayor peso político en el peronismo (Torre, 2012). Si hacia las elecciones internas de finales de 1988, el oficialismo conducido por Jorge Almada y Horacio Salusso incluyó entre sus propuestas «torcer el rumbo de la política socioeconómica entreguista» del gobierno de Alfonsín,^[77] una vez avanzada la crisis hiperinflacionaria y asumido el programa de reformas por parte de Menem, el perfil político del sindicato tendió a moderarse sustancialmente. En este marco la UOM sufrió una importante merma de afiliados y una ostensible reducción de su capacidad de negociación con las cámaras patronales, que en las negociaciones paritarias rechazaron los reclamos de recomposición salarial con el argumento de que solo eran posibles al costo de despidos masivos de personal y que la situación solo podría revertirse en una lenta y dificultosa salida exportadora.^[78] El sesgo negociador y moderado de los principales referentes del sindicalismo industrial, tuvo su correlato en el plano partidario, ya que Campellone apostó por

[76] LVI, 14/07/1988, pág. 5. En la óptica de Campellone las medidas de fuerza debían implementarse una vez agotadas «las posibilidades de diálogo» con la patronal. Cuando se desataba un escenario de conflicto, desde el sindicato se apelaba a la intervención del Ministerio de Trabajo de Córdoba, especialmente a su facultad de imponer una conciliación obligatoria para lograr una solución negociada entre las partes. Ello puede observarse en el conflicto por despidos en Renault en marzo de 1991. LVI, 10/03/1991, pág. 5

[77] LVI, 20/11/1988, pág. 6; LVI, 22/11/1988, pág. 6; LVI, 24/11/1988, pág. 5. En aquel entonces la UOM-Seccional Córdoba contaba con 14 000 afiliados, siendo la séptima seccional en orden de importancia a nivel nacional.

[78] LVI, 20/02/1990, pág. 5; LVI, 25/03/1990, pág. 7. En un informe realizado en base a datos de la Fundación Fiel, el IEERAL y el Censo Nacional Económico para la provincia de Córdoba del período 1974/1985, se observó que en 1990 el número de obreros industriales de la provincia se redujo un 35 % respecto de los de 1974. La industria metalúrgica, que en dicho año ocupaba el 50 % del total del personal ocupado por la industria manufacturera, registraba en abril de 1990 un promedio de 51 % de capacidad ociosa. CL n.º 10-11, diciembre de 1990, pág. 8.

«darle tiempo a Menem»,^[79] y Salusso circunscribió el debate sobre la crisis al ámbito provincial, apelando a la necesidad de crear «pactos sociales» con el gobierno y las cámaras patronales.^[80] Ambos dirigentes convergieron en afrontar el escenario en curso desde la apelación a la unidad del movimiento sindical, en detrimento del debate sobre el rumbo adoptado por el gobierno nacional. Sin dudas el perfil político adoptado por Campellone y Salusso se relacionó con las apuestas que ambos desarrollaron al interior del PJ, ya que, como señalamos, aquel fue electo senador provincial por el PJ en 1989 y Salusso diputado provincial en 1987 y diputado nacional en 1990, en reemplazo de De la Sota, designado embajador. Sin embargo, si nos atenemos a la trayectoria de los dirigentes sindicales que se manifestaron críticos al gobierno nacional, muchos de ellos cercanos a la RP, puede notarse que también siguieron ligados al PJ.^[81]

En este marco general, es comprensible que la mayor parte de los posicionamientos críticos hacia la política económica de Menem hayan provenido de los sindicatos del ámbito público de la provincia agrupados en la CGE. En ese sentido, una expresión radicalizada de la brecha de credibilidad de Menem ante el sindicalismo provincial fue la de Manuel Chara (SEP), quien sostuvo que el presidente debía cambiar su política a «favor de las multinacionales» o renunciar; en el marco de un paro de 48 horas de los estatales provinciales.^[82] Con menor intensidad, y ceñidos al debate provincial sobre la ley de Reforma Administrativa, se expresaron Ceballos, en rechazo a las privatizaciones en el sector energético;

[79] CL n.º 6, septiembre de 1989, pág. 7.

[80] CL n.º 8-9, septiembre de 1990, pág. 21.

[81] Por ejemplo, Daniele, Héctor Morcillo –Sindicato de Trabajadores de Industria de la Alimentación (STIA)– Chavarría, Grahovac y las autoridades de la CGT Chacabuco participaron de la «marcha del silencio» organizada por el PJ de Córdoba en mayo de 1991, que con el motivo de reclamar una «moralización» de la actividad pública puso en marcha la estructura partidaria de cara a las elecciones provinciales de ese año. LVI, 3/5/1991, pág. 4. En diciembre de 1990, Daniele, Morcillo, Chavarría, Grahovac y Raúl Salazar (Caucho), habían emitido un documento que exigió un cambio de rumbo en la política económica con vistas a que el Estado « ejerza su autoridad controlando los parámetros esenciales de la economía, interviniendo y promocionando la revolución productiva», LVI, 04/03/1990, pág. 6 A.

[82] LVI, 07/03/1990, pág. 4.

López, en defensa de la banca provincial pública; Grahovac, en torno a que los trabajadores eran el sujeto capaz de tornar eficiente la administración pública y sus empresas; entre otros.^[83]

En líneas generales, la dinámica de cuestionamiento de los dirigentes sindicales al programa de reformas partió del sector de representación de cada dirigente y del escenario provincial –donde la filiación partidaria del gobernador facilitaba la adopción de un posicionamiento crítico– para desde allí, y solo en algunas oportunidades, cuestionar al gobierno nacional.^[84] Pero en sus sectores mayoritarios, pese a reparos que generaba la orientación asumida por el menemismo, el sindicalismo provincial no puso en tela de juicio su pertenencia al peronismo, ni el modelo organizativo tradicional.^[85] En torno a este último aspecto, es pertinente considerar que en el primer tramo del menemismo, el debate sobre la reforma laboral se concentró en un paquete de leyes –de empleo, de accidentes de trabajo y de topes indemnizatorios– orientado a flexibilizar las pautas del contrato individual de trabajo y disminuir el costo laboral de los empresarios, bajo el argumento de que ello iba a facilitar la inversión y la creación de empleo.^[86] Sin embargo, esta primera iniciativa de reforma no afectaba el núcleo básico de la legislación sobre la estructura sindical –fundamentalmente la ley de asociaciones profesionales y la ley convenciones colectivas de trabajo– pese a que el gobierno se esforzó en instalar la necesidad de pasar del sistema de convenio único por actividad a convenios

[83] CL n.º 7, diciembre de 1989, suplemento ley de Reforma Administrativa (CECOPAL), págs. 1-7.

[84] En tal sentido, pueden considerarse los posicionamientos de Ceballos que priorizaron la situación del sector energético y las reformas propuestas por Angeloz, para, desde ese eje, sostener que Menem no tenía «el monopolio del peronismo», CL n.º 8-9, septiembre de 1990, pág. 20.

[85] Aunque algunas voces disidentes comenzaron a desarrollarse, como fue el caso de Oscar Garat –Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN)– quien a fines de 1989 señaló la necesidad de nuevas formas de organización, «al margen de las estructuras tradicionales», CL n.º 7, diciembre de 1989, págs. 12-3. Su organización luego confluyó en la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) de Córdoba (Cuesta y Reynoso 2012).

[86] CL n.º 7, diciembre de 1989, págs. 6-7; LVI, 12/02/1990, pág. 4; LVI, 03/05/1991, pág. 4; J. C., Toledo, «La calma que precede a la tormenta», LVI, 02/09/1991, pág. 6.

regionales, zonales e incluso por empresa; en consonancia con lo demandado insistentemente por los empresarios.^[87]

9.4 El cierre de la brecha de credibilidad en el peronismo de Córdoba: las elecciones de 1991

Algunos observadores asociaron el declive de la representatividad del sindicalismo de Córdoba con la retracción del sector industrial y el aumento del desempleo y la pobreza.^[88] Si bien esta interpretación cuenta con buenos argumentos desde el punto de vista de la estructura socioeconómica provincial, conviene adoptar una perspectiva que incorpore elementos propios de la dinámica político-partidaria y del orden de la legitimación de la política menemista. Las elecciones de 1991 fueron claves en ese sentido, ya que posibilitaron el cierre de la brecha de credibilidad del menemismo ante el sindicalismo peronista provincial y ante el peronismo de Córdoba en su conjunto. Más extensivamente, la contienda electoral de 1991 fue central para la consolidación del gobierno nacional, al determinar si el programa económico –que ya comenzaba a ser simbolizado por el régimen de convertibilidad y su objetivo de estabilidad macroeconómica– contaba con el apoyo de la ciudadanía.

Las elecciones renovaron una parte significativa del Congreso de la Nación, por lo que fueron claves para que el gobierno mantuviera la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación.^[89] Iban a realizarse originalmente el 8 de septiembre, pero el gobierno propuso su postergación al 27 de octubre, bajo la creencia –que luego se corroboró acertada– de que un mayor tiempo de aplicación de la convertibilidad iba a dar resultados más tangibles y

[87] S. Montoya, «Comportamientos incompatibles», LVI, 28/04/1991, pág. 1; J. C. Vercellone, «Reforma laboral y contradicciones», LVI, 14/09/1991, pág. 12. El peso que el sindicalismo aún conservaba en el peronismo, produjo un bloqueo considerable de las iniciativas de reforma laboral en el Congreso, sobre todo si se las compara con el tratamiento que tuvieron otras reformas estructurales, como las privatizaciones (**Etchemendy y Palermo 1998**, pág. 564).

[88] J. C. Moreno, «Córdoba, veinte años después», LVI, 29/05/1989, pág. 11.

[89] Finalmente, el gobierno no solo mantuvo la mayoría parlamentaria, sino que la amplió, al lograr obtener mayoría absoluta en la Cámara de Senadores de la Nación. LVI, 16/09/1991, pág. 4.

un mayor apoyo del electorado.^[90] La convertibilidad, independientemente de sus implicancias y de su sustentabilidad en el tiempo, brindó resultados en el corto plazo. En abril de 1991, el primer mes de su implementación, la inflación fue de un 5 por ciento, en franco contraste con casi dos años de políticas antiinflacionarias infructuosas.^[91] Con el correr de los meses, el descenso en la suba de los precios se profundizó, llegando incluso a una deflación mayorista en agosto, el mes previo a la elección. Asimismo, de acuerdo con los indicadores oficiales, se produjo una reactivación del nivel de actividad económica (del orden del 15 % en la producción industrial de septiembre de 1991 respecto del mismo mes de 1990), del poder adquisitivo del salario, del consumo y de la recaudación fiscal. En ese marco, el gobierno auguró un crecimiento del PBI del 10 % anual en los siguientes tres años, a condición de profundizar la reducción de regulaciones, aumentar la productividad laboral y acoplar los precios domésticos a los internacionales.^[92]

En Córdoba, Angeloz apostó a su segunda reelección, hecho clave para su proyección nacional.^[93] En campaña, el gobernador apoyó la política económica de Cavallo, poniendo solo reparos en la solvencia política el gobierno de Menem para implementarla.^[94] Al ser interpelado por la campaña electoral del justicialismo, acentuó aún más su identificación con los objetivos del programa de reformas, llegando a afirmar «la estabilidad soy yo».^[95] En esa clave sostuvo que era necesario flexibilizar la economía y sus «factores productivos» para adaptarse a los cambios que imponía la incorporación de nueva tecnología en el ámbito productivo y la situación mundial.^[96] Sin embargo, respecto de la reforma estatal, el gobierno de Angeloz delineó un modelo propio para disminuir las erogaciones estatales e implementar las privatizaciones, desregulaciones y

[90] LVI, 24/04/1991, págs. 1 y 3; LVI, 25/04/1991, pág. 1; LVI, 10/05/1991, pág. 4; LVI, 11/05/1991, pág.1. Sin embargo, Córdoba, al igual que otros 12 distritos, no se adecuó al cronograma electoral propuesto por el gobierno nacional y sostuvo la fecha del 8 de septiembre.

[91] J. C. Moreno, «El voto de la gente», LVI, 12/05/1991, pág. 8.

[92] LVI, 01/09/1991, pág. 1 E.

[93] LVI, 02/03/1991, pág. 7; H. Quiroga Lavié, «¿Puede ser reelecto el gobernador de Córdoba?», LVI, 28/04/1991, pág. 10.

[94] LVI, 05/04/1991, pág. 4.

[95] J. Turello, «En las urnas cordobesas, ¿un destino nacional?», LVI, 08/03/1991, pág. 5.

[96] LVI, 16/04/1991, pág. 4.

descentralizaciones (Gordillo 2003).^[97] Sin embargo, la concreción de las reformas fue dilatada en sus contenidos más significativos. Las cuatro principales empresas provinciales –EPEC, EPOS, Banco de la Provincia de Córdoba y Banco Social del Córdoba– y la Caja de Jubilaciones de la Provincia, siguieron bajo la órbita estatal durante todo el tercer mandato de Angeloz, y algunas estimaciones indican que el gasto público de la provincia presupuestado para 1992 iba a ser el más alto de los últimos doce años (Gordillo 2013a, pág. 253). En similar sentido, tuvieron lugar las resistencias del gobierno provincial para acoger al Banco de la Provincia de Córdoba a la reforma financiera impulsada por el gobierno nacional con posterioridad a las elecciones, y el rechazo de Angeloz al pedido de Cavallo de reducir la tarifa provincial de energía eléctrica.^[98] Como veremos, la dilación de las reformas provinciales fue uno de los principales ejes de la oposición del PJ de Córdoba a Angeloz.

Con vistas a las elecciones de septiembre, el PJ de Córdoba atravesó una fuerte disputa centrada en las candidaturas y en la fórmula para disputar el gobierno provincial a la dupla Angeloz-Edgardo Grosso, con pocas chances de éxito según numerosas encuestas de opinión. Miradas en su conjunto, las distintas corrientes internas adhirieron enfáticamente a la orientación del gobierno nacional, con matices asociados, en última instancia, a las diversas vías de interlocución que tuvieron con el menemismo. En un primer momento hubo cierto consenso, que incluyó a los sectores del menemismo local, en torno a que De la Sota era el «candidato natural» del peronismo, producto de la dilatada negociación entre la RP de Córdoba y el gobierno nacional.^[99] En este marco, De la Sota buscó evitar una disputa interna en las elecciones del PJ y optar, en cambio, por una «lista de unidad», que incluyera a los sectores menemistas. Con ello, abandonó su insistente prédica a favor de las elecciones directas en el PJ, en una postura que le valió numerosas críticas.^[100] Finalmente, la disputa de candidaturas

[97] LVI, 06/09/1991, pág. 4. Como ya vimos, el punto de partida de la instalación de la agenda de reformas en la provincia fue la ley de Reforma Administrativa del Estado Provincial sancionada en octubre de 1989.

[98] LVI, 16/09/1991, pág. 6; LVI, 12/09/1991, pág. 11.

[99] LVI, 17/05/1991, pág. 5.

[100] LVI, 13/05/1991, pág. 4; LVI, 14/05/1991, pág. 6; LVI, 16/05/1991, pág. 1. A los sectores de Aráoz y Alarcía, se sumó un nuevo espacio alineado con el gobierno nacional, apoyado por el ministro del Interior José Luis Manzano

en las elecciones internas se circunscribió al ámbito de la Ciudad Capital, donde se enfrentaron Balestrini y el candidato de la RP, el extrapartidario Hugo Taboada, dirigente de extracción desarrollista (Ferrari y Closa 2015, pág. 59).

Los comicios internos se realizaron el 30 de junio y tuvieron la particularidad de ser abiertos, pudiendo votar los ciudadanos no afiliados a ningún partido. El triunfo obtenido por Taboada consolidó el perfil político que la conducción del PJ procuró darle a la propuesta electoral de septiembre. En aquel entonces la línea política de De la Sota y del elenco dirigencial que lo acompañaba había tomado cierta distancia de la reivindicación de los partidos políticos como instancia clave del sistema democrático, para caracterizar negativamente a estas instituciones como espacios «cerrados», ajenos a las problemáticas de la sociedad (Reynares 2017, págs. 111-119). Desde esa tesitura, De la Sota caracterizó al segundo gobierno de Angeloz como el de «un pequeño y cerrado grupo de amigos» y presentó a su propuesta frentista –llamada Unión de Fuerzas Sociales (UFS)– como una convocatoria amplia a sectores sociales ajenos a la política partidaria.^[101] Dichos sectores no respondieron a los grupos sociales a los que el peronismo había interpelado a lo largo de su historia, sino a sectores empresarios plenamente identificados con la orientación del gobierno nacional, fuerzas políticas liberales y referentes de determinados sectores de la ciudadanía de escasa cercanía con el peronismo.

En este escenario, De la Sota realizó un denodado esfuerzo por presentar al peronismo de Córdoba como una fuerza política cercana al mundo empresario, identificada con la estabilidad macroeconómica.^[102] De igual modo, la Fundación del Proyecto Argentino (FUNDEPA), espacio de estudios técnicos del PJ presidido por el senador provincial por la Capital Esteban Dómina, intervino a favor de Cavallo en su polémica con el ministro de Economía de la provincia, Jorge Caminotti, a raíz de la intención de aquel de eliminar el impuesto a los débitos bancarios, sellos y

y referenciado en el diputado nacional Miguel Balestrini, quien aspiró a la candidatura a intendente de Córdoba Capital. LVI, 16/05/1991, pág. 5.

[101] LVI, 01/09/1991, pág. 7.

[102] LVI. Córdoba, 09/04/1991, pág. 3. En este marco, en diferentes unidades básicas el PJ de Córdoba realizó charlas sobre «el plan Cavallo», a cargo del senador provincial por la capital Raúl Costamagna. LVI, 02/05/1991, pág. 5.

transacciones con títulos.^[103] Para Caminotti, dicha medida iba a perjudicar a la provincia, al implicar una pérdida de recursos coparticipables. En discrepancia, desde FUNDEPA se argumentó a favor de la propuesta de Cavallo, ya que iba a reducir el costo financiero de las empresas y dinamizar el mercado de capitales. Asimismo, la fundación cuestionó el endeudamiento del Estado provincial con el Banco de la Provincia y apoyó la presión del gobierno nacional para que las provincias redujeran sus erogaciones, observando que la reforma del Estado seguía siendo una «una asignatura pendiente del gobierno cordobés».^[104]

En plena disputa electoral, las expresiones de De la Sota no solo apelaron a los informes de la Fundación Mediterránea (FM) –el *think tank* empresario liderado por Cavallo– sino que incluyeron una integración de sus principales planteos y de su retórica y la promesa de que su eventual gabinete iba a estar conformado por los cuadros técnicos de la entidad y por funcionarios del gobierno nacional, entre ellos el secretario de Industria y Comercio Juan Schiaretta.^[105]

Allí reclamó la necesidad de reducir el «costo Córdoba», rebajando tarifas energéticas e impuestos «exorbitantes» y disminuyendo el gasto público, para así alentar inversionistas. Para ello se debía avanzar en la reforma del Estado provincial, desburocratizando su administración desde «reglas del juego claras, estables y conocidas por todos»,^[106] lo que incluiría una asociación de las empresas estatales –especialmente de EPEC– con capitales privados para

[103] LVI, 10/05/1991, pág. 5; Dómina, Esteban, entrevista, 30/9/2021.

[104] Cabe destacar la distancia entre este posicionamiento de FUNDEPA, de pronunciada cercanía a Cavallo, respecto del documento emitido a comienzos de 1990 por Maqueda, Blanco y Dómina que analizamos anteriormente. Como puede observarse, la convertibilidad y la figura de Cavallo en ascenso modificaron sustancialmente los posicionamientos de la RP hacia el gobierno nacional.

[105] LVI, 01/09/1991, pág. 7. En apoyo a dicha promesa, Cavallo manifestó que los equipos técnicos de la FM estaban a disposición de De la Sota, en caso de resultar electo gobernador. LVI, 01/09/1991, pág. 10.

[106] Empleaba así una expresión similar al eslogan de la FM «reglas claras, simples y de aplicación automática», mediante el cual los portavoces de la entidad sintetizaban el modo en el que las políticas estatales debían regular la actividad económica (Ramírez 2000). A su vez, De la Sota citaba informes de la FM, para señalar que desde 1983 hasta la fecha se habían designado 152 000 nuevos agentes estatales, ante lo cual el peronismo se disponía a congelar nuevas designaciones y despedir «ñoquis». En similar

hacerlas más «competitivas» y «eficientes»; la reasignación de funciones y recursos; y la descentralización y participación de municipios en la gestión de distribución de energía eléctrica. Desde estas coordenadas, tuvo una clara intención de asociar su candidatura a la popularidad con la que contaban Menem y Cavallo.^[107]

Como puede observarse, el peronismo de Córdoba imbricó su línea política al discurso de la FM, el *think tank* que controlaba la política económica nacional. Para comprender las motivaciones de esta apuesta, es necesario considerar que la crisis hiperinflacionaria de 1989-1990 derivó en que la cuestión económica –centrada en el fenómeno inflacionario– se erigió como un problema político de primer orden, cuyo tratamiento demandaba el saber «técnico» y «apartidario» de economistas formados en determinado perfil profesional (Heredia 2015). En este proceso, de alcance nacional, la dirigencia formada en los partidos políticos delegó la gestación de las políticas económicas en los economistas tradicionalmente asociados a la «ortodoxia», externos al ámbito de los partidos políticos.^[108] A ello se sumaba el hecho de que en el escenario político de Córdoba, la alianza entre el PJ y sectores «independientes» o «apartidarios», dentro de los cuales la FM ocupó un lugar prominente, era una de las claves de la estrategia electoral del peronismo, nominada en la coyuntura electoral de 1991 como una «apertura a la sociedad».

Pero el esfuerzo por adaptar al PJ de Córdoba a la hegemonía que el menemismo construía a nivel nacional con una propuesta electoral competitiva no se convalidó en las urnas, ya que la UCR obtuvo el 51 % de los votos, contra el 38 % de UFS. Un contundente triunfo radical, que amplió la diferencia obtenida en la elección de 1987.^[109] Sin embargo, esta coyuntura electoral mostró que la orientación del gobierno nacional en materia económica –el eje central

sentido se expresó Maqueda, candidato a diputado nacional de la UFS. LVI, 03/02/1991, pág. 4.

[107] LVI, 01/09/1991, pág. 7.

[108] Según Mariana Heredia, fue justamente Cavallo la figura más representativa del proceso por el cual los economistas cobraron centralidad en el debate político, relegando a los políticos en materia de decisión económica a partir de una estrategia de poder centrada en la persuasión de diversos públicos y la gestación de alianzas con sectores políticos y empresariales de distinto signo, en un contexto de agravamiento sostenido de la problemática inflacionaria.

[109] LVI, 09/09/1991, pág. 1.

del debate político– logró una adhesión expresa y contundente por parte de la dirigencia peronista de Córdoba. Ahora bien, si en este marco los principales planteos de la dirigencia justicialista se articularon con la agenda de reformas que promovía el gobierno, los principales sectores empresariales y los *think tank* económicos a ellos asociados, tornándose por momentos simétricos, debe observarse que ello se produjo en un marco de fuerte debilitamiento político del sindicalismo peronista. La fragmentación del campo sindical ya apuntada se mantuvo durante la coyuntura electoral de 1991, y los nucleamientos sindicales peronistas perdieron gravitación en la nominación de candidaturas. Si en 1987 el sindicalismo logró una cuota importante de representación en la Cámara de Diputados de la provincia, incorporando a 6 legisladores, en 1991 este número se redujo a la mitad.^[110] También resulta significativo que estas candidaturas fueran ocupadas por dirigentes que expresaron su descontento ante la orientación del menemismo en su momento inicial. Como apuntamos, la CGT Chacabuco se alineó con la CGT Azopardo, expresó cuestionamientos contundentes al gobierno nacional y promovió las acciones de protesta de la CGE. En la elección de 1991, en cambio, este sector se incorporó a una propuesta electoral plenamente identificada con el rumbo adoptado por el gobierno nacional. En similar sentido, debe interpretarse la elección de Sixto Ceballos (LyF) como concejal de Córdoba Capital por la UFS, uno de los principales referentes de la CGE.^[111]

La disipación del descontento de los sectores mayoritarios del sindicalismo se asoció, indudablemente, a los resultados que arrojó la implementación de la convertibilidad. En esa dirección fue Campellone, quien expresó con mayor claridad la perspectiva de adaptación ante el escenario socioeconómico de la convertibilidad:

«La estabilidad es el agente natural de la reactivación y, de persistir, nos va a encontrar a comienzos del año próximo con niveles de producción mucho más amplios. (...) Nuestro aporte ha sido por demás significativo. La crisis nos ha

[110] Fueron electos por UFS tres diputados de extracción sindical: Carlos Vallesjos –Asociación Gremial de Trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba (AGTUNC)– vinculado al sindicalismo renovador, y Miguel Ángel Correa y Ramón Nieva, referentes de la CGT Chacabuco. LVI, 04/09/1991, pág. 5

[111] LVI, 09/09/1991, pág. 6. El sindicalismo menemista de Córdoba también formó parte de UFS, a través de la elección de Roque Negri (SCT) como concejal por la ciudad capital.

golpeado de la forma más dura. Pero, a la hora de discutir, es preferible hacerlo sobre la base del uno o dos por ciento de aumento y no ir con reclamos del cuarenta por ciento. Para nosotros también es primordial la estabilidad y sobre esta base vamos a ver cómo las empresas plantean el tema de los aumentos salariales en función de la productividad. No rehuimos esa conversación porque, después del sacrificio de los trabajadores, nos interesa ahora que el empresario hable de incorporación tecnológica, entre otros factores».^[112]

9.5 Reflexiones finales

El recorrido trazado permite observar que la estabilidad macroeconómica asociada a la convertibilidad y las elecciones de septiembre 1991 afectaron sustancialmente la participación política del sindicalismo peronista de Córdoba: si en sus orígenes el menemismo fue cuestionado por una buena parte del arco sindical peronista provincial –lo que incluyó relevantes procesos de movilización, sobre todo de los sindicatos del sector público que contaron con estructuras movilizadoras a tal efecto– una vez consolidada la política económica nacional y garantizada la competitividad electoral del gobierno, la dirigencia sindical moderó sustancialmente su perfil político, adaptándose a las dinámicas prevaecientes en el PJ. Con ello, se produjo un disciplinamiento del sindicalismo peronista ante el gobierno nacional y su programa de reformas. En este proceso fue clave la estrategia de la conducción del PJ de Córdoba liderada por De la Sota, ya que neutralizó las manifestaciones de oposición interna a la orientación del gobierno nacional durante su período inicial. Con esto, quien había compartido la fórmula presidencial de la RP en las elecciones internas de 1988, abandonó las propuestas programáticas que habían impulsado una democratización de las instancias de representación, para sustentar una adaptación del peronismo de Córdoba a la hegemonía menemista. A nuestro modo de ver, nuestro abordaje brinda elementos de interés para analizar las tensiones que atravesaron la recuperación democrática, en torno a la capacidad del movimiento obrero cordobés de dinamizar acciones colectivas –al menos en tanto defensa de las condiciones salariales y laborales de los trabajadores asalariados– y sus límites en el marco de la consolidación del menemismo y las reformas de mercado.

[112] LVI, 02/09/1991, pág. 12.